

# COLOMBIA ANTE EL *alca* Y LOS DESAFÍOS PARA LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES\*

Roberto González Arana

## ROBERTO GONZÁLEZ ARANA

PH.D EN HISTORIA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE RUSIA. COORDINADOR DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS POLÍTICO-ECONÓMICOS DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE E INVESTIGADOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN DESARROLLO HUMANO – CIDHUM– DE LA MISMA INSTITUCIÓN. PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE Y LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO. VICEPRESIDENTE DE LA ADHILAC.  
(rogonzal@uninorte.edu.co)

\* Este trabajo hace parte del proyecto de investigación (en curso) «Regionalización e integración en América Latina», financiado por las Universidades de Buenos Aires, Guadalajara, Michoacán y la Asociación por la Unidad de Nuestra América, AUNA.

## RESUMEN

En este trabajo se analizan avances y retrocesos de la Comunidad Andina de cara a la creación de un Área de Libre Comercio para América Latina –ALCA–. Para ello se han tomado como eje los últimos dos años, período signado por importantes hechos, como son el arribo de nuevos gobiernos a la región y la definición de una política homogénea ante las negociaciones con el resto de América .

**PALABRAS CLAVE:** Area de libre comercio, integración regional, alca, comunidad Andina.

## ABSTRACT

*In this paper, we aim at analyzing the progress and backward movement of Andean Community facing the creation of the Free Trade Area of the Americas (FTAA). To do this, we have taken as main point the last two years, a period characterized by important facts, such as the arrival of new governments in the region and the definition of homogeneous politics before negotiations with the rest of America.*

**KEY WORDS:** *Free Trade Area, regional integration, FTAA, Andean Community.*

## ANTECEDENTES

El estudio sobre las particularidades de las iniciativas para la integración de las Américas, o de América Latina, bien podría partir del análisis sobre los antecedentes históricos de la idea integracionista, hecho evidente desde la época en que los países latinoamericanos luchaban por la emancipación. La identidad de intereses en contra de la dominación europea, así como unos lazos culturales comunes contribuyeron a sentar las bases para propugnar en favor de la unión continental. No obstante lo anterior, también es cierto que las dificultades para cristalizar diversas propuestas integracionistas como la Gran Colombia u otras posteriores tuvieron como raíces, entre otros motivos, el marcado sentimiento nacionalista y centralista de algunos países, o bien, el fraccionamiento entre las elites locales de América. Esto se expresaba a través de las pugnas entre las facciones que propendían por la independencia, por un lado, y los que se aliaban con los peninsulares, por el otro, pese a la generalizada antipatía en contra de estos últimos. Esto explica por qué en Chile, por ejemplo, la elite criolla contribuyó incluso a la postergación de la independencia, dado que estaba estrechamente unida a los representantes de la Corona, incluso a través del parentesco. Asimismo, en Perú existieron grupos oligárquicos interrelacionados con terratenientes, comerciantes, funcionarios municipales y burócratas en los cuales peninsulares y criollos se fusionaban en una sola clase dominante de blancos (Lynch, 1993). Cuba y Haití colonial bien podrían también ampliar nuestro ejemplo. Ahora bien, en la actualidad son múltiples las dificultades que persisten no sólo en los países latinoamericanos para alcanzar el consenso sobre las políticas que deben adoptarse ante los embates de la globalización sino que, además, tampoco las naciones del continente hallan la mejor ruta para estrechar sus lazos y negociar de mejor forma ante Estados Unidos acuerdos de trascendental importancia como el Área de Libre Comercio para las Américas. Un buen ejemplo de una región con profundas contradicciones lo constituye la región andina.

## COLOMBIA Y LA COMUNIDAD ANDINA

Indudablemente, el último año resultó muy difícil para la Comunidad

Andina de Naciones, no sólo por la prolongación de los problemas económicos y sociales comunes a América Latina (bajo crecimiento, aumento del desempleo) sino, además, como consecuencia de los precarios avances de las negociaciones entre los países andinos para establecer un arancel externo común ante terceros, que ha de proponerse para un Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA. El máximo logro al respecto fue concretar apenas un arancel para el 62% de los cerca de 7.000 productos que los miembros de la Can importan de terceras naciones. Además de haber quedado pendiente el otro 38%, aspecto sobre el que se esperaba hubiera consenso en el 2003; tampoco se pudo definir cuáles productos se deberían desgravar a partir de un año, cuáles a cinco años y cuáles a diez años y más.

A juicio de varios analistas, la Comunidad Andina sufrió en el 2002 la que parece la peor de sus crisis en materia de integración. Esto se explica, en parte, por la persistente heterogeneidad de sus intereses, la inestabilidad política regional y el distanciamiento de Colombia con sus vecinos, a raíz del conflicto armado en este país y las consecuencias que de ello se derivan, entre otros aspectos. La difícil situación en la zona se observa, por ejemplo, a través de medidas drásticas y unilaterales como el cierre nocturno de la frontera entre Colombia y Ecuador por parte de este último país –en septiembre del 2002– a la altura del puente Rumichaca, argumentando para ello motivos de seguridad, medida decretada en tiempos de campaña electoral, y que complació a los empresarios de Guayaquil, quienes se han mostrado contrarios a la permanencia de Ecuador en la Can. Esta medida puso en peligro el comercio de 1.060 millones de dólares, actual monto de los negocios bilaterales entre este país y Colombia. Es de anotar que estas acciones no son aisladas sino que tienen como antecedentes diversos episodios, los cuales ilustran una creciente tensión en la frontera, pues frecuentemente los grupos armados colombianos incursionan en esta zona y no sólo enfrentan a la fuerza pública ecuatoriana sino que además realizan secuestros y extorsiones a ciudadanos del vecino país. Esto explica, por ejemplo, declaraciones como la del ex presidente ecuatoriano León Febres Cordero, quien en julio de 2001 exhortaba a las autoridades de su país a movilizar a las fuerzas militares hacia la frontera con nuestro país, a fin de evitar que esta zona pudiera convertirse en *otra Colombia*. En este mismo sentido, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal

ecuatoriana, monseñor Antonio Arregui, aseveraba que había un cierto número de ecuatorianos que estaban «recibiendo entrenamiento tanto de la guerrilla colombiana como de paramilitares» (González Arana, 2001). A tal punto llegó el nivel de las hostilidades que incluso la primera autoridad de El Charchi (Ecuador) manifestó públicamente que el gobierno de su país debía dialogar con la guerrilla colombiana con el propósito de alcanzar un acuerdo de convivencia en la frontera (*El Tiempo*, 7 de julio de 2001).

Venezuela, por su parte, anunció en agosto de 2002 la militarización de su frontera con Colombia, al tiempo que las relaciones bilaterales entre estas dos naciones han estado muy tensas por múltiples motivos. Por ejemplo, en el plano político se destacan los fuertes cuestionamientos al gobierno del presidente Hugo Chávez de ser evidentemente permisivo –a juicio de autoridades colombianas– con la presencia de guerrillas como las FARC o el ELN en su territorio,<sup>1</sup> y además por los permanentes ataques del mandatario venezolano a las *oligarquías colombianas*, a quienes acusa de haber apoyado el último golpe en su contra. En el campo económico el panorama parece más gris si observamos que en enero de 2003 las exportaciones colombianas a Venezuela cayeron en un 72%, tendencia que ya se vislumbraba desde el primer semestre de 2002, pues la Asociación de Industriales Colombianos –Andi– reportó en ese momento una caída del 17,1% en las exportaciones colombianas a este mercado (*El Tiempo*, 7 de abril de 2003). Estos precarios resultados tienen como antecedente el cierre del tránsito sobre territorio venezolano a los transportadores de Colombia –medida impulsada por el gobierno de Hugo Chávez en 1999 al inicio de su mandato y que se mantuvo aun después que el Tribunal Andino de Justicia la condenó–, norma que había asestado un rudo golpe a la integración binacional. A lo anterior se añade la crisis política interna del gobierno de Caracas, la cual ha alterado la relación política de Venezuela con sus demás vecinos. Simultáneamente, hallamos en este país a un mandatario poco amigo del ALCA y distante de Washington, por sus inclinaciones pro-cubanas, al punto de que por ello a este país se le excluyó de los

<sup>1</sup> Ejemplo de ello fueron las declaraciones del fiscal general de Colombia, Luis Camilo Osorio, quien acusó al gobierno venezolano de ser un «refugio de delincuentes». Véase *El Tiempo*, 20 de abril de 2003.

beneficios de las Preferencias Arancelarias Andinas, hoy conocida como Atpdea<sup>2</sup>. En contraste, al otro lado de la frontera se ubica al gobierno de Colombia, principal aliado histórico de Venezuela dentro de la Can, el cual propugna por una colaboración con la Casa Blanca cada vez más estrecha en materia económica y política, al punto que para el continente ya es un hecho cierto el que las relaciones exteriores de Colombia han vuelto a la vieja doctrina del *Respice Polum*, esto es, de alineamiento incondicional con Estados Unidos.<sup>3</sup>

Si analizamos al resto de países de la Comunidad Andina de Naciones, se percibe asimismo que la heterogeneidad de sus intereses dificulta la idea de la integración regional. Tal es el caso del joven gobierno de Lucio Gutiérrez en Bolivia, de quien aún no se conoce bien su orientación política, y que se ha manifestado abiertamente partidario del proteccionismo agrícola e incrédulo frente a la apertura. Su situación geográfica le permite a Bolivia un intercambio comercial *más natural* con sus vecinos del sur que con sus socios andinos del norte. Tampoco para todos en Ecuador la adhesión a la Can parece tener la misma importancia estratégica, pues numerosos empresarios de este país han puesto en entredicho la conveniencia de permanecer en este organismo. El argumento que sostienen los dirigentes de las cámaras de producción de Guayaquil –considerada la capital económica de este país– y que parece tomar fuerza en sus zonas de influencia en la costa, es que para una economía dolarizada como la de Ecuador es imposible competir con socios que periódicamente devalúan sus monedas, como sucede con Colombia y Venezuela, pues esta situación, a su juicio, se convierte en insostenible. También el sector pesquero quiere que Ecuador salga de la Can, en oposición al gobierno y a los empresarios de Quito, quienes

2 Ley de Promoción Comercial Andina y erradicación de la Droga, sancionada por el presidente Bush el 6 de agosto de 2002, la cual renueva y amplía los beneficios de la ATPA hasta diciembre de 2006 a favor de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú como compensación a sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico.

3 Analistas colombianos como Eduardo Pizarro sostienen que la alianza estratégica de Colombia en torno a Washington es el resultado de: a) el peso creciente de Estados Unidos en el sistema internacional, a lo que se añade que son nuestro principal socio comercial; b) al fracaso de la unidad latinoamericana, y c) a la importancia estratégica que ha adquirido el «Plan Colombia» y la Iniciativa Andina para el fortalecimiento y reconstrucción del Estado y sus Fuerzas Armadas. Véase Eduardo Pizarro, «Washington y América Latina», *El Tiempo*, 28 de abril de 2003.

sí creen en las bondades del acuerdo regional (*El Tiempo*, 22 de agosto de 2002). Si los líderes de la Can, Colombia, Ecuador y Venezuela, no mejoran su nivel de entendimiento será muy difícil alcanzar la unificación dentro de la misma.

## LA FRAGILIDAD DEL CONSENSO Y LA CRISIS REGIONAL ANDINA

Las dificultades para lograr un acuerdo con respecto al arancel externo común propuesto a Estados Unidos, a instancias del ALCA, ha conducido a que otros países como Colombia y Perú opten por la búsqueda de un convenio comercial bilateral con Washington y Canadá, siguiendo para ello el ejemplo de Chile o México, naciones que mantienen un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, el cual los coloca potencialmente en ventaja ante las negociaciones del ALCA. En este sentido, el presidente de Perú, Alejandro Toledo, anunció –en octubre de 2002– que su gobierno había iniciado conversaciones con el de Estados Unidos a fin de firmar un convenio comercial bilateral. Toledo comentaba que si bien se estaba trabajando «para cohesionarse más con la Comunidad Andina y ser más competitivos no sólo en términos de aranceles, el Perú no solamente quiere tener un liderazgo en la CAN y ser partícipe del ALCA sino lograr un acuerdo comercial bilateral con los Estados Unidos tal como se lo expresó al Secretario de Comercio de este país» (*El Peruano*, octubre de 2002). Cabe señalar que una gran dificultad para el logro de una política arancelaria común de la región tiene que ver con las estructuras arancelarias de Perú y Bolivia, las cuales son bastantes disímiles a las del resto de las naciones andinas y requerirían ser modificadas internamente por cada país.

Para el caso de Colombia, ya desde comienzos del nuevo gobierno –en septiembre de 2002– su ministro de Comercio y Turismo, Jorge Humberto Botero, había manifestado públicamente la intención de este país de buscar nuevas rutas, paralelas al ALCA. A tono con esto, dicho funcionario declaró al respecto que «Si el ALCA se retrasa o se bloquea, el Plan B es trabajar en un acuerdo bilateral con los Estados Unidos» (*El Tiempo*, 14 de septiembre de 2002). Siguiendo estas directrices, en febrero de 2003 el gobierno del presidente Alvaro Uribe elevó una petición formal ante el gobierno de Estados Unidos para realizar un acuerdo de libre comercio bilateral con este país, gestión

realizada a través de su ministro de Comercio y Turismo, quien ratificó su pesimismo con relación al consenso regional y argumentó nuevamente que las negociaciones con Estados Unidos le podrán servir al país «en caso de que haya algún tropiezo con el ALCA». Por supuesto, la decisión de Colombia asestó un golpe a la frágil unión regional, y renunció de hecho al reciente acuerdo, a través del cual el gobierno de Uribe se había comprometido con la firma de una declaración de los países andinos para negociar en grupo con Estados Unidos (*El Tiempo*, 11 de febrero de 2003).

Esta no era la primera vez que se ponía en evidencia las contradicciones del actual gobierno colombiano respecto de la integración regional durante el último año, pues precisamente en este período tuvo lugar un desafortunado episodio para la imagen del país y para la unidad andina. En breve, el hecho consistió en que Colombia, por medio de su ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, promovió ante los países de la CAN, en octubre de 2002, la idea de iniciar las discusiones con Estados Unidos, a instancias del ALCA, con una base sobre los aranceles agrícolas andinos, más alta de la oficialmente reportada a la Organización Mundial del Comercio, OMC –a la que se le llamó de *aranceles consolidados*–, a fin de tener una estrategia de negociación ante terceros, que comenzara por una cifra alta, para luego poder bajar al punto ideal. El ministro colombiano convenció al resto de países de la Can sobre las conveniencias de su iniciativa, pues se trataba de proteger al campo de los grandes subsidios que tienen los granjeros en Estados Unidos, y por ello ésta fue suscrita por las autoridades de la Can reunidas en Lima, en octubre de 2002, incluyendo a la representante del gobierno colombiano. Sin embargo, ante la molestia de Washington, manifestada a través de su representante comercial, Robert Zoellick<sup>4</sup>, la administración colombiana decidió dar marcha atrás, y para ello convenció a los países andinos de que lo más conveniente ahora era volver a los aranceles que se venían aplicando (los que se llaman del *statu quo*) y abandonar la iniciativa de los aranceles consolidados. La nueva postura de Colombia rompió el consenso recientemente logrado, ante lo cual los gobiernos de Venezuela y Perú optaron por su propia franja de

<sup>4</sup> Quien manifestó que esto colocaba en duda la aprobación del Tratado de Preferencias Arancelarias Andinas, e incluso el financiamiento externo y las ayudas del «Plan Colombia».

precios ante el área (*El Tiempo*, 31 de octubre de 2001). Este cambio o *reversazo*, como se le llamó popularmente, está en consonancia con el nuevo momento de las relaciones con Washington y se expresa en acciones como el respaldo irrestricto al gobierno norteamericano en su aventura imperial contra el territorio de Irak, pese a que con esta postura se estuviese en contra del consenso latinoamericano y se deteriorase la frágil unidad continental. Valga decir que para algunos funcionarios del país, como el excanciller, Guillermo Fernández de Soto, un gran legado que heredó el actual gobierno colombiano de la administración anterior –léase, gobierno Pastrana– fue «el logro del más alto nivel de cooperación económica, política, militar y social entre los Estados Unidos y Colombia» (Fernández de Soto, 2002). Acerca de lo cual cabe decir que, a nuestro juicio, *esta herencia* torna más compleja la relación de Colombia con sus vecinos, pues, por ejemplo, para el caso de Brasil, bien se sabe que el gobierno de Ignacio «Lula» Da Silva se propone ejercer un contrapeso al liderazgo norteamericano en el continente, y el de Venezuela tampoco considera a Estados Unidos como un socio cercano a sus intereses.

## CONSIDERACIONES FINALES

Los aspectos más relevantes para la región durante los últimos años se relacionan con el inicio de los nuevos gobiernos en Colombia, Ecuador, Brasil y Bolivia. Estos cambios aún no han incidido en el logro de grandes avances hacia la consolidación de la integración regional andina. Es así como la política de *seguridad democrática* instaurada por la administración del presidente Uribe en este país ante el conflicto colombiano aún no logra persuadir a sus vecinos de que los problemas de orden público en Colombia han dejado de ser un peligro para la región. Por ello, metas como la expedición de un pasaporte único andino aún no han podido cristalizarse. La grave crisis política de Venezuela también ha impedido una participación más activa de este país en la Can. Sumado a lo anterior, las debilidades del Parlamento Andino<sup>5</sup> y del Tribunal

5 Salvo para Ecuador y Venezuela, en los demás países de la Can aún no se escoge a los delegados ante el Parlamento Andino por medio de la votación de los congresistas sino por acuerdos políticos. Tampoco este órgano de la Can tiene facultades para emitir normas de estricto cumplimiento, aunque uno de sus objetivos es la armonización de las legislaciones.

Andino de Justicia, del cual se han incumplido 17 de sus fallos, contribuyen a desdibujar las metas de los países andinos.

Pese a todas las vicisitudes del proceso hacia la conformación del ALCA, la 7ª reunión ministerial de esta iniciativa, realizada el 10 de noviembre de 2002 en Quito, sirvió para que los cancilleres y ministros de Comercio de 34 países que negocian su creación confirmaran su compromiso de eliminar los subsidios a las exportaciones que afectan el intercambio de productos agropecuarios, al igual que otras medidas de efectos similares. En dicho encuentro todos estuvieron de acuerdo en que Estados Unidos debe convencerse de que no podrá haber ALCA sin un tratamiento especial a la agricultura de América Latina. Este sentimiento había sido expuesto con anterioridad por parte de Guillermo Fernández de Soto, Secretario General de la CAN, quien un mes antes había declarado que no habría «apertura de los mercados agrícolas andinos si no hay decisiones importantes en materia de subsidios y ayuda por parte de los países desarrollados» (Síntesis de Lima, 18 de octubre de 2002). Al respecto, incluso funcionarios de la Unión Europea han expresado que sólo a través del apoyo a la agricultura de los países más pobres será posible contribuir a una relación más equitativa con ellos.

Por otra parte, valga la pena subrayar que de ninguna manera consideramos la opción del ALCA como *la redención para América Latina*, sino todo lo contrario. En este sentido estamos de acuerdo con los cuestionamientos a esta iniciativa (Suárez, 2003), los cuales hallan su mejor expresión en la *Declaración de Quito* –realizada en octubre de 2002–, suscrita por parlamentarios de diez países latinoamericanos,<sup>6</sup> documento en el que se manifiesta, entre otros aspectos, que «los textos del ALCA, han sido realizados en un escenario de secretismo, con reuniones cerradas, plazos arbitrarios, documentos incompletos y de acceso restringido; las grandes potencias tienen un control sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología, los mercados, la industria, el comercio, las finanzas, la agricultura y los servicios, a lo que se le suman los subsidios a su producción interna, condiciones que determinan que los países latinoamericanos no están en capacidad de competir; la fórmula del

<sup>6</sup> Asistieron parlamentarios de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela.

*libre comercio*, promovida por el ALCA favorece una política de apertura indiscriminada que arruina la producción industrial y agropecuaria, elimina los derechos de los trabajadores, socava las normas de protección de consumidores, acrecienta el endeudamiento público, y pone en peligro la conservación del patrimonio económico y natural» (*El Herald*, 26 de octubre de 2002).

Tanto es y ha sido difícil el proceso con miras a la implementación del Alca que en los actuales momentos el consenso de las autoridades norteamericanas parece estar en que lo más plausible es un ALCA menos ambicioso para el 2005 y uno más completo a futuro.

Con respecto a la actual relación de la Comunidad Andina con la Unión Europea, se evidencia que hoy existen temas más apremiantes para el Viejo Continente que sus vínculos con América Latina, pues la perspectiva de la ampliación de la Unión Europea significará un gran esfuerzo a fin de viabilizar ese estratégico proyecto, y para tal fin la atención se centrará en apoyar a los nuevos estados. Así, por ejemplo, Europa del Este, por su importancia geopolítica al ser país fronterizo con la Europa Occidental, por sus similitudes culturales, por la necesidad de moderar sus flujos migratorios, entre otros aspectos, podría desplazar a Latinoamérica de la agenda de prioridades de la UE. En la actualidad, el balance América Latina-UE no parece muy favorable, y esto se observa a partir del acuerdo de los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión, quienes se proponen una revisión de las tarifas aduaneras a varios países, lo cual implica un alza gradual de aranceles para algunas exportaciones de Colombia y Costa Rica a partir de noviembre de 2003. En concreto, se trata de levantar las exenciones que tenían estas dos naciones, particularmente para flores y frutas, de manera tal que en un lapso de un año se les estipule un impuesto del 8,5% (*El Tiempo*, 15 de abril de 2003). En el plano de la cooperación militar a Colombia, al parecer sólo España e Inglaterra están dispuestos a brindarla, pues la negativa del vocero de la Unión a los requerimientos del gobierno del presidente Uribe –en mayo de 2003– dan cuenta de ello.

Finalmente, consideramos que la idea de la integración regional ante el ALCA no debe hacernos olvidar que la filosofía de Estados Unidos se fundamenta en que los países latinoamericanos desmonten sus aranceles y protecciones a los productos agrícolas que vienen de este país,

mientras el gobierno de Washington se niega a suprimir sus subsidios a los agricultores norteamericanos, lo cual nos coloca en una inmanejable desigualdad. Para el caso de Colombia, como consecuencia de la apertura indiscriminada, implementada a partir del gobierno de César Gaviria (1990-1994), hemos pasado de importar 500 mil toneladas de alimentos al año, a importar hoy, luego de una década, un poco más de 7 millones de alimentos al año según cifras oficiales.

El ALCA se ha planeado para un mercado de ochocientos millones de habitantes, en donde quinientos de ellos son latinoamericanos –de los cuales el 50% percibe menos de dos dólares diarios–, Estados Unidos controla el 71% de la producción y el 51% del comercio exterior. Así también, mientras en 1950 América Latina representaba el 35% de las importaciones estadounidenses, hoy, en contraste, tienes apenas el 13% de las mismas. Por otra parte, las exportaciones de Estados Unidos a la región pasaron de 31.000 millones de dólares en 1984 a 93.000 millones diez años después.<sup>7</sup>

Como se observa, los retos para la Colombia y el resto de la región ante el ALCA son múltiples y el éxito del proceso de inserción a esta área dependerá de múltiples factores, entre otros, de que podamos unificar criterios de cara al país y de mejor forma por la defensa de nuestros propios intereses regionales.

## BIBLIOGRAFÍA

- FERNÁNDEZ DE SOTO, G. (2002, septiembre). Logros de la política exterior de Colombia: 1998-2002, *Colombia Internacional*, N° 53, p. 92, Universidad de los Andes.
- FESCOL (1995). *El Diálogo Unión Europea- América Latina*. Santafé de Bogotá.
- GONZÁLEZ ARANA, R. & CRISORIO, C. (2001) (Eds.). *Integración en América Latina y el Caribe. Análisis sobre los procesos de regionalización*. Barranquilla: Ediciones Uninorte.
- LYNCH, J. (1993). Los orígenes de la Independencia hispanoamericana. En L. Bethell (Ed.), *Historia de América Latina*. Barcelona: Crítica.
- SUÁREZ MONTOYA, A. (2003). *Crítica al ALCA*. Santafé de Bogotá: Ediciones Aurora.

<sup>7</sup> SAMPER PIZANO, D. (2003). «Tom y Jerry y la trampa del ALCA», Bogotá: *El Tiempo*, junio.